
LA COMUNICACION SOCIAL EN LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

Durante los meses de Abril y Mayo de 1978 los principales candidatos a la Presidencia de la República de Venezuela desfilaron ante el Colegio Nacional de Periodistas, a fin de exponer ante ese importante organismo gremial sus respectivos programas políticos en el área de las comunicaciones sociales. Las elecciones presidenciales se celebrarán en Diciembre de este mismo año.

Ese desfile de candidatos presidenciales ante el Colegio Nacional de Periodistas tiene, al menos, una doble importante significación. Por una parte, es expresión del lugar privilegiado que se le reconoce a la comunicación social en la conducción de un Estado moderno. Por otra parte, es también expresión del interés que tienen los diferentes candidatos de buscar la simpatía y

el apoyo de los periodistas dentro del proceso de una campaña electoral que se vehicula cada vez más a través de los medios de comunicación de masas.

Ensayaremos a continuación un breve análisis comparado de las posiciones de los distintos candidatos ante el Colegio Nacional de Periodistas, tal como las mismas han venido siendo reseñadas por la prensa nacional. Para nuestro análisis utilizaremos concretamente como fuente al diario "El Nacional" de Caracas, en sus ediciones dominicales desde el 9 de abril hasta el 14 de mayo de 1978. Los candidatos presidenciales, cuyas declaraciones serán objeto de este modesto estudio, son los siguientes: Luis Herrera Campins (Partido Socialcristiano, COPEI), Américo Martín (Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR), Héctor Mujica (Partido Comunista de Venezuela, PCV), Luis Piñerúa Ordez (Acción Democrática, AD), Luis Beltrán Prieto (Movimiento Electoral del Pueblo, MEP) y José Vicente Rangel (Movimiento al Socialismo, MAS).

Todos los candidatos coinciden en la necesidad de garantizar, desde el gobierno, el respeto al derecho de los ciudadanos a la libre expresión del pensamiento. Todos también aceptan el papel de la iniciativa privada en el campo de los medios de comunicación de masas. En concreto, en ninguno de los programas de gobierno se contempla la expropiación por el Estado de esos medios de comunicación de masas y en casi todos ellos

se habla expresamente del mantenimiento de un "sistema mixto".

Esas son las coincidencias fundamentales. Ahora bien, los matices mismos con los que se afirman esos principios establecen significativas diferencias en la concepción de la libertad de expresión y también en la concepción del papel del Estado en el área de las comunicaciones sociales.

Herrera Campins, por ejemplo, habla de un "escrupuloso y absoluto" respeto a la libertad de expresión. Luis Beltrán Prieto afirma que la libertad de expresión no tiene otras limitaciones "salvo aquellas que llevan por fin preservar a la sociedad de la propaganda de vicios, factores destructivos y amenazas para la paz" y que para ello "es necesario un mejor control de la radio y la televisión". Américo Martín habla de la democratización de los medios para que estos "se coloquen al servicio de los intereses generales de la mayoría del pueblo" y, para ello, también de la necesidad de combatir privilegios y monopolios. José Vicente Rangel coincide con Américo Martín en la necesidad de una radiodifusión "al servicio del país" y, en general, en una democratización de los medios "no para limitar los derechos, sino para ampliarlos". Héctor Mujica, por su parte subraya que la comunicación social debe estar "dirigida a satisfacer en primer lugar los intereses del pueblo".

Los candidatos de los partidos de oposi-

ción que nunca llegaron al gobierno insisten en la grave ausencia de una verdadera política del Estado en el terreno de las comunicaciones sociales. Héctor Mujica aboga, en concreto, por la creación del Consejo Nacional de la Prensa, formado por representantes del sector industrial, del Estado y de los profesionales del periodismo, como un paso para intentar nacionalizar la política de comunicación social del país. José Vicente Rangel, por su parte, hace énfasis en la debilidad del Estado frente a las presiones de los grupos económicos, que lo han hecho retroceder cada vez que ha intentado alguna definición más precisa en este campo de las comunicaciones sociales (Proyecto "Ratelve", Consejo Nacional de Comunicaciones previsto en el V Plan de la Nación, Agencia Nacional de Noticias, etc). El candidato del MAS habla también de la necesidad de modernizar el viejo y "permanentemente burlado" Reglamento de Radiodifusión de 1941.

Casi todos los candidatos se refieren al Ministerio de Información y Turismo. Luis Piñerúa precisa que el mismo "estaba sujeto a sufrir transformaciones en su estructura". Herrera Campins asegura que en su gobierno "no será un despacho copeyano, sino un organismo nacional". Mujica se refiere a la necesidad de empezar por convertir en un verdadera Ministerio de Información lo que en el actual gobierno no ha sido sino "un Ministerio de Turismo con información del Estado y para la promoción personal del Ministro".

Todos los candidatos, a excepción del candidato de Acción Democrática, coinciden en el mal uso que el gobierno ha venido haciendo de los medios de comunicación propiedad del Estado. Las críticas se concentran en particular sobre la Televisora del Estado (VTV). Los candidatos de COPEI y del MAS subrayan la importancia de que los medios de comunicación del Estado lleguen a tener cobertura nacional "para defensa de la soberanía". El candidato del MEP habla también de "ampliar los medios oficiales de comunicación para activarlos como instrumentos de educación y cultura".

Varios candidatos se pronuncian sobre el tema de la eventual conveniencia de crear una agencia nacional de noticias y otra latinoamericana. Los candidatos de COPEI y de AD coinciden en oponerse a la creación de una agencia informativa nacional y, en relación a la latinoamericana, si bien afirman que es deseable, niegan que sea viable en las actuales circunstancias políticas del continente. El candidato del MEP toma claramente posición en favor de estimular la formación de agencias nacionales de noticias, para contrarrestar la actividad de las agencias internacionales "siempre ajenas a los intereses del país". Por su parte, el candidato del MIR estaría dispuesto a apoyar la creación de una agencia latinoamericana de noticias con la condición de que en esa iniciativa hubiera participación gremial de los trabajadores de la prensa y quedaran excluidos de la misma los

países con dictaduras de las del tipo fascista.

Luis Piñerúa promete la televisión en color. Luis Beltrán Prieto señala que un gobierno debe pensar en alimentar y asistir bien a todos los ciudadanos más que en dar entrada a la televisión en colores, "donde seguramente habrá oportunidad de ver que es roja la sangre que se derrama en los programas de violencia". Otros candidatos no se pronuncian al respecto.

Tomando en cuenta que las declaraciones respectivas de los candidatos fueron hechas todas ante el Colegio Nacional de Periodistas, no puede extrañar que en las mismas el tema de las relaciones del gobierno con el gremio de periodistas tuviera un particular relieve.

Luis Herrera afirma que en su gobierno quedaría descartada la amenaza, el hostigamiento y la persecución a los periodistas. Es particularmente enfático en asegurar que no utilizaría la publicidad del Estado -como se sabe, en Venezuela el Estado es el gran comprador de publicidad y de espacios para publicidad- como mecanismo de presión para premiar el respaldo ni para castigar la crítica al gobierno por parte de los órganos de comunicación en manos de la empresa privada.

Américo Martín se muestra decidido partidario de que los trabajadores tengan participación en la línea editorial y, en general, en la política informativa de los distintos medios de comunicación social.

Subraya también la necesidad de que el Colegio Nacional de Periodistas combata enérgicamente el "palangrismo" y cualquier otro vicio que atente contra la ética profesional del periodista. También Luis Beltrán Prieto insiste profundamente en las cualidades éticas que deben caracterizar a una profesión de tanta y tan grave responsabilidad social.

Héctor Mujica se declara igualmente partidario el papel de los periodistas profesionales en la conducción de la política informativa de los diferentes medios de comunicación social, ya que, "aunque no existe la objetividad en el periodismo, la mejor objetividad es la que ejercen quienes dominan mejor la técnica de la información".

Luis Piñerúa promete a los periodistas plena libertad de acceso a las fuentes gubernamentales, porque "el periodista no debe ser un objeto pasivo que se limita a transcribir los tradicionales boletines oficiales de prensa". También les promete respaldo a todas sus legítimas reivindicaciones gremiales, sobre todo económicas y de seguridad social. Particular significación política tiene su afirmación de que el funcionario del gobierno que se siente agredido por lo que escribe o dice un periodista no debe ser fácil en recurrir a los tribunales de justicia sino utilizar, en su defensa, los medios de comunicación social mismos.

José Vicente se ocupa largamente de la im

portancia de reivindicar el valor profesional del periodista. A ese respecto, señala en concreto la discriminación de que es objeto la mujer periodista y la marginación que sufre el periodista de provincia en general. Insiste finalmente el candidato del MAS en la urgencia de mejorar el ordenamiento legal del Estado a fin de garantizarle al profesional del periodismo una necesaria seguridad jurídica.

José Ignacio Rey.
